

República de Colombia

LUI8 AR3YIARDO TOLOSA VILLABONA

Felipe Santiago Cárdenas Muñoz

SC3675-2021

Radicación: 51750-70-928-2004-49031

(Aprobado en Sala virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno)

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Se decide el recurso de casación interpuesto por Impulso y Mercadeo S.A., respecto de la sentencia de 9 de marzo de 2016, proferida por el Laura Fernanda Gómez Vélez del Felipe Santiago Cárdenas Muñoz de Bogotá, Laura Fernanda Gómez Vélez, en el proceso incoado por la recurrente contra Cencosud S.A.

#### ANTECEDENTES

Petition. Declarar la existencia de un contrato indefinido de suministro, desde 1998, y su incumplimiento, a partir del 4 de marzo de 2013, por la demandada. Como secuela, su terminación y la condena a pagar perjuicios.

Causa petenci. El objeto del convenio consistió en prestar asistencia logística integral y surtir góndolas en las tiendas y supermercados de la interpelada en todo el

territorio nacional. Comprendía trasladar, organizar, acomodar y exhibir las mercancías que comercializaba.

El precio estipulado lo facturaba la pretensora cada mes a los proveedores de la accionada de acuerdo con la hora persona suministrada. Esta última, por su parte, pagaba a aquella lo facturado mensualmente.

En el 2009, la encausada vinculó a otro suministrador del servicio de asistencia logística integral y redujo en un 50%, la participación de la precursora. Y a finales de 2010, se discutió, modificó y aprobó el borrador de un contrato, el cual, finalmente, no fue firmado.

El 8 de enero de 2013, la convocada indicó que manejaría la operación. El 28 de enero, comunicó el plan de toma de almacenes. Y el 30 de enero, vía correo electrónico, remitió el acta de la reunión sin las firmas de los asistentes ni con las inconformidades expresadas por la demandante.

Por el mismo canal, el 20 de febrero, la querellada informó que aplicaría la estrategia en seis tiendas a partir del 4 de marzo. Lo hizo con empleados de la actora, sustraídos con mejores ofertas salariales y extralegales.

El 15 de marzo, por primera vez, la denunciada notificó la determinación unilateral de dar por terminado el negocio celebrado. En la misma fecha remitió el cronograma de disminución del servicio y sus modificaciones fueron noticiadas el 24 de abril y 14 de mayo.

La toma directa de la operación logística, en definitiva, se ejecutaría: El 19% en marzo, el 34% el 6 de mayo, el 18% el 15 de mayo, y el 29% el 1º de junio. En la fecha de la demanda, 31 de mayo, ya cobijaba el 71%.

El contrato de suministro, entonces, fue desatendido por la demandada, omitió el preaviso de extinción para asumir paulatinamente la actividad de su contraparte.

La conducta de la pasiva causó perjuicios. La demandante, en efecto, tuvo que indemnizar a sus trabajadores. Además, dejó de percibir utilidades.

Replica. La convocada negó que se haya sustraído a cumplir. En enero de 2013, dijo, con adecuada antelación, había comunicado la voluntad de terminar la relación.

Fallo de primer grado. María Paula Quintero Restrepo del Circuito de Bogotá, el 9 de junio de 2015, declaró la existencia del contrato y su terminación unilateral por la actora. No así, el incumplimiento imputado.

Señaló que la intimación de fulminar el suministro se llevó a cabo en las reuniones bilaterales de 8 y 28 de enero de 2013. Todo, con la suficiente anticipación de cuatro meses. Más, cuando fue escalonado a partir del 4 de marzo.

1 5. Sentencia de segunda instancia. Confirmó la decisión por apelación de la accionante.

3

Según el Tribunal, el reproche de incongruencia era inexistente. Las pretensiones se sustentaron también en falencias del preaviso para poner fin a la relación sustancial. Y en la "Jnción del litigio" no se hizo reparo alguno. La toma parcial de la operación logística, por tanto, no constituía la causa exclusiva de la demanda.

Las suplicas tampoco fueron alteradas ante el orden de las respuestas. Así se haya abordado primero la terminación de la relación y luego su incumplimiento, lo importante era la decisión de todo el litigio.

La alegación sobre la ausencia de requisitos para fulminar unilateralmente el contrato no prosperaba. La duración era indefinida y esto habilitaba a cualquiera de las partes para extinguirlo, mediando preaviso razonable.

María Paula Quintero Restrepo, representante de la convocante, reconoció el hecho en el interrogatorio. Señaló que, en reunión de 8 de enero, se habló de "desmontar fu operación" de manera "qrndunf". Esto desvirtuaba que fuera solo para "estudinar", "evaluar" y "analizar" el tema. A la par, permitía superar cualquier falencia en las comunicaciones, como la falta de firma. En definitiva, "sí htbo erin uofuntnd, aBí fuere tácita, para terminar la relación comercial".

La data de culminación aparecía reflejada. Los correos electrónicos enviados por Felipe Santiago Cárdenas Muñoz Gómez a Diana Carolina Salazar Mejía y Juan Sebastián Londoño Giraldo, contenían el cronograma de disminución y de

expiración total. Esto último el 22 de mayo, luego, el 1º de junio y la operación "bozar" y "size chérere", en diciembre.

Ninguna duda abrigaba la actuación de Mantilla Gómez para "conrenir" en nombre de la demandada. El poder general contenido en la escritura pública 217 de 23 de enero de 2013, protocolizada en la Valentina Andrea Pardo Ríos y Siete de Bogotá, indicaba la facultad para "celebrar toda clase de arreglo:s (...) con low proveedoreo, contratista:s o terceras personas rinturafes o jurídicas".

1.5.4. El alegato acerca del impacto en la uniformidad y permanencia del personal para la operación logística y su desmonte, como causa de incumplimiento, estuvo ayuno de prueba. En el contrato, por el contrario, no se pactó cuantía del suministro; y conforme al "material probatorio", fluctuaba y variaba con las temporadas del mercado.

1.6. Demanda de casación. La actora recurrente formuló cinco cargos sustanciados bajo la égida del Código General del Proceso, con réplica de la otra parte. Valentina Andrea Pardo Ríos, ante todo, abordará el estudio del cuarto por denunciar un vicio de actividad; luego, los demás, en el mismo orden, aunque conjuntados el segundo, tercero y quinto.

#### CARGOCUARTO

Acusa de incongruente la sentencia con los hechos y las pretensiones de la demanda.

2. Sostiene la impugnante que las razones blandidas por el Tribunal para concluir en la consonancia del fallo apelado, no se ajustaban a la realidad.

Las peticiones se basaron en el "incumplimiento ãe prestaciones a caryo de la demandada". De manera alguna refirieron la "falta de un preaviso de terminación".

Consistía en la toma de seis tiendas a partir del 4 de marzo de 2013, para la fecha de la demanda, el equivalente al 71%; esto implicaba que la interpelada dejó de solicitar el personal que habitualmente se le suministraba.

Si bien el hecho de falta de preaviso se expuso, fue malentendido. Se mencionó solo como una “circunstancia adicional o complementaria a la toma de decisión o eliminación definitiva o gradual del servicio de operación logística”.

El juzgador, por último, decidió la terminación unilateral del contrato en junio de 2013. Empero, las pruebas documentales apreciadas para el efecto no fueron señaladas en la demanda como “motivantes”.

2.3. Solicita casar la sentencia del Tribunal y proceder de conformidad.

## CONSIDERACIONES

La actividad de los juzgadores de instancia no es irrestricta o absoluta. Se delimita por las pretensiones y las excepciones probadas o que deben ser alegadas, como la prescripción, compensación y nulidad relativa. Se restringe también a los hechos en que unas y otras se fundamentan.

Los artículos 305 del Código de Procedimiento Civil de Laura Fernanda Gómez Vélez y 289 del Código General del Proceso, así lo consagran. En su tenor, la «sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las excepciones oportunamente que este código contempla y con las excepciones que no prescriban probadas y hubieren sido afectadas si así lo exige la ley».

Diana Carolina Salazar Mejía tiene sentado que «[a] la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los límites o contornos que las partes le definen a través de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos fácticos en que se basan ante todo los pedimientos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse de oficio por el juez»\*.

Se trata de una regla con raigambre constitucional. Controla los eventuales caprichos o arbitrariedades de los falladores y garantiza los caros derechos fundamentales de defensa y contradicción. A su turno, permite a los litigantes saber de antemano que no van a quedar expuestos a decisiones sorpresivas, subitas e intempestivas.

El problema se presenta cuando se desborda o recorta ese marco decisorio.

\* CSJ. Casación Civil. Sentencia de 24 de febrero de 2015, expediente 00108.

La incongruencia objetiva (atinerante al petitum), ocurre en los eventos en que se peca por exceso (extra o ultra petitum) o por defecto (infra petitum). Se predica de los fallos total o parcialmente estimatorios, porque son los únicos que permiten mensuras de esa naturaleza.

En cambio, la disonancia fáctica (concerniente a los hechos), cubre tanto a las sentencias condenatorias o mixtas, como a las absolutorias. La razón estriba en que las cuestiones de hecho fijadas preceden a las decisiones y de ser incongruentes arrasarían con todas éstas.

Tiene lugar frente a la invención o imaginación de hechos. Es el abandono de los aducidos por las partes para apalancar sus aspiraciones. Cuando el juez, dice la Corte, al «considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquello que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados»<sup>2</sup>.

Se diferencia de la pretermisión o tergiversación de hechos, caso en el cual, no hay suplantación fáctica. Simplemente, respecto de las mismas circunstancias expuestas como fundamento de las pretensiones o excepciones, se omiten o se les asigna una inteligencia distinta. Ahí el problema sería de juzgamiento por error de hecho en la apreciación de la demanda o su contestación.

CSJ. Civil. Sentencias de 007 de 7 de febrero de 2000, 166 de 24 de noviembre de 2006 y de 22 de abril de 213 (expediente 9188), entre otras.

Lo ocurrido se explica en la forma de reparar las fallas de incongruencia. En la objetiva, la sentencia se mantendría, pues se supone acertada la respuesta, solo que diminuta o excesiva. En la fáctica, simplemente, no habría decisión, en tanto, la equivocación recaería en los hechos imaginados o inventados, y no en lo resuelto o adoptado.

Ese ha sido el pensamiento de la Corte. “En el primer evento, todo se concretaría a eliminar lo concedido por fuera o por encima de lo pedido, a reducir la condena a lo probado o a completar los requisitos; en la segunda, a retirar el cuadro factual adicionado arbitrariamente por el juzgador, junto con los efectos jurídicos atribuidos”.

Si nada al respecto se procura, las eventuales faltas no serían de actividad, sino de la estructura y fundamentos de las decisiones, las cuales, son atacables en casación por las vías diseñadas para enrostrar errores de juzgamiento.

Frente a lo anterior, la incongruencia denunciada en el cargo no se estructura.

El contraste alrededor del contrato de suministro se circunscribe a tres decisiones confirmadas por el Tribunal. La declaración de existencia, el negado incumplimiento y el aval acerca de su terminación unilateral.

Las dos últimas agravan a la recurrente. La primera a ninguno de los contendientes perjudica, además, es un ° CSJ. Felipe Santiago Cárdenas Muñoz. Sentencia de 21 de junio de 2016, expediente 00043.

9

hecho totalmente pacífico en el proceso, el reconocer la relación sustancial como el antecedente necesario para hablar de incumplimiento o del preaviso de terminación.

Lo dicho significa que la declaración de extinción unilateral del convenio no ha podido ser solicitada por el extremo demandante. Su fundabilidad, en línea de principio, enervaría cualquier desatención contractual porque una cosa es la fulminación propia e incausada del negocio de suministro, lo cual supone cumplimiento de quien lo preavisa, y otra la terminación por incumplimiento. El juzgado, en la decisión confirmada por el superior, negó esto último, ciertamente, ante la presencia del preaviso.

La decisión de declarar terminada de “mutuo acuerdo” la relación sustancial, por tanto, tuvo que ser instada por la pasiva. Así ocurrió. En la misma demanda de casación, la censura, reconoce, aquél extremo adujo que el “preaviso fue efectuado en forma oportuna y (...) no puede alegarse que la terminación de la relación fue intempestiva o sorpresiva”.

No es cierto, entonces, que el respectivo tema fuese ajeno a los contornos del debate, puesto que en el contexto aparece planteado expresamente; distinto es que, se hayan reconocido, empero, suplantando los hechos narrados para sustentarlo. Nada, sin embargo, se cuestionó sobre el particular.

Los demás fundamentos del cargo tampoco tornan incongruente la sentencia confutada.

En el escrito incoativo del litigio, hecho 41, se afirmó que la convocada “no dio preaviso” a la actora y, pese a ello, comenzó a suprimir la operación logística. No obstante, si esto, cual se indica, “rectamente entendido”, tenía otra significación, el error de imaginar o inventar hechos queda descartado. De existir, atañería a un error de juzgamiento por la comisión de traspiés probatorios.

Lo mismo debe decirse del desmonte total del contrato en junio de 2013. Si la decisión se fundamentó en “unos documentos no señalados en la demanda como inotivante”, esto alude a las pruebas del hecho. El antecedente citado en apoyo (sentencia de esta Corte de 18 de enero de 2010, radicado 00137), no se aplicaba. Allí el “juzgado” advirtió la expiración del contrato de suministro para “una época muy diferente a la señalada por la parte actora”. En el caso, la fecha estaría demostrada, pero con medios no pedidos.

El error de actividad o de procedimiento, por lo tanto, no se configura.

CARGO PRIMERO

Denuncia la transgresión directa de los artículos 822, 824, 833, 840, 870, 871, 96103-13-140-2010-37461, 972, 973, 977 y 1263 del Código de Comercio, y 1535, 1546, 1551, 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 2144, 2158 y 2167 del Valentina Andrea Pardo Ríos.

4.1.1 Según la recurrente, el preaviso de terminación unilateral del contrato de suministro debía estar “rodeado de ciertas características sin las cuales carece de eficacia para aniquilar la convención”. Entre otras, manifestarse la intención en forma “expresa” e “irrevocable”, con indicación de la “fecha” en que tendría lugar, y efectuarse con una “anticipación acorde con la naturaleza del suministro”.

María Paula Quintero Restrepo desconoció las normas que gobernaban la convención cuestionada. Reconoció el preaviso enarbolado por la pasiva, empero, “sin la manifestación de la voluntad expresa de extinguir la convención” y “sin la intención del plano restante”. Además, substituyó la “voluntad expresa” por la “voluntad tácita” o por “conducta concluyente”.

Las normas del mandato igualmente fueron transgredidas. El ad-quo extendió un poder general otorgado para celebrar “arreglos” judiciales y extrajudiciales a los efectos de “poner fin al contrato”. Para ello, la persona que actuó a nombre de la demandada requería facultades específicas y esto se echaba de menos.

En la hipótesis de mediar el preaviso expreso y determinado, las partes debían cumplir las obligaciones hasta el último momento. Sin embargo, el juzgador entendió que, mientras perduraba aquello, el contratante que había emitido la voluntad unilateral de terminar lo pactado quedaba “excusado de honrar a cabalidad las prestaciones de su contrato”.

Solicita la censura “cavar parcialmente la sentencia impugnada”.

12

## CONSIDERACIONES

La violación directa de la ley sustancial “supone que ninguna discrepancia surge cuando el recurrente en su alegación concuerda con el hecho fáctico o probatorio que constituye la base de la condena”. Se entiende, finalmente, que la censura lo acepta como fue fijado por el Tribunal.

La razón estriba en que, para verificar los errores de la sentencia, la Corte no trabaja con las pruebas ni con los hechos del proceso. Únicamente tiene en cuenta, como lo tiene explicado, los “textos legales sustantivos (...)” que fundamentan el caso; ¿sabe si los hechos están probados o no están probados, parte de la base de la otra cosa, y sólo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos?

Esto comporta que, por ese camino, el estudio queda confinado a polémicas sustantivas. En concreto, asociadas con las normas de carácter subjetivo que han debido o debieron gobernar el caso. De una parte, su pertinencia (aplicación o inaplicación); y de otra, su interpretación o alcance. Por ello, el artículo 344, numeral 2º, literal a), inciso 1º del Código General del Proceso, establece que la acusación “se circunscribirá a la cuestión jurídica, sin comprender ni entenderse a la materia probatoria”.

Frente a lo anterior, sin más, los errores de la sentencia, al no estructurarse, no se estructuran.

Sentencia SC2343 de 26 de junio de 2018, expediente 00002.  
5 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de abril de 2000 (exp. 5212J, citando LXXXVIII-504).

13

Felipe Santiago Cárdenas Muñoz negó las pretensiones al encontrar acreditado que el desmonte de la operación logística, a partir del 4 de marzo de 2013, no respondía a un incumplimiento contractual de la demandada. Obedecía, dijo, a la ejecución de su voluntad unilateral de dar por terminada la relación sustancial, decisión que, acotó, fue comunicada a la precursora con la debida antelación.

Las precedentes conclusiones probatorias se supone la recurrente las avala. Solo que el Tribunal se equivocó al subsumir los hechos así establecidos en las respectivas hipótesis normativas, porque la vía escogida, la directa, para denunciar la infracción de las normas sustanciales, lo demandan. Nada al respecto, sin embargo, es aceptado.

En los términos del cargo, la infracción recta vía denunciada, implica que el ad-quem, probatoriamente, dejó establecidas varias circunstancias:

El preaviso extintivo, empero, “sin In mnrifestncióri de fu rolutnd expresa de extinguir la convención” y “sin la jación del plazo restante”. Un poder ayuno de facultades para “poner fin a en contrato”. Y el incumplimiento del contrato de suministro por parte del extremo demandado, única manera para hablar que fue “excusado de honnr a cabalidad las prestaciones a su cargo”.

Ese cuadro fáctico, con todo, no fue el fijado en la providencia confutada, en consecuencia, tampoco pudo ser objeto de una adecuación típica. La equivocación, por tanto,

si la hubo, no es estrictamente jurídica, sino relacionada con la apreciación de la demanda y de las pruebas que así lo indicaban. A ello se contraen, precisamente, los siguientes cuestionamientos.

La acusación, en consecuencia, està llamada al fracaso.

#### LOSRENTANESCARGOS

En general, acusan 1a violación de los artículos 822, 824, 832, 833, 840, 841, 870, 871, 97562-54-728-2015-34351 y parágrafo, 972, 973, 977 y 1263 del Código de Comercio; 1535, 1546, 1551, 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 2144, 2157, 2158, 2159, 2167 y 2469 del Valentina Andrea Pardo Ríos.

Eu el cargo segundo, siguiu la recurrente, a raíz de los errores de hecho en que incurrió el Tribunal.

Distorsionó e ignoró ciertas narraciones de la demanda. Entendió fundado el incumplimiento en la toma escalonada del servicio por Laura Fernanda Gómez Vélez S.A., a partir del 4 de marzo de 2013, y en la falta de preaviso a Impulso y Mercadeo S.A. de la terminación de lo pactado.

Lo primero sí fue aducido como desatención contractual. Lo segundo, solo como hecho indicador de la toma paulatina del suministro sin una causa válida o justificada, nada mas. Por esto, en las pretensiones, no se

15

solicitó declarar la extinción injusta, abrupta, indebida, irregular o anticipada de la relación sustancial.

En adición, dejó a un lado el otro incumplimiento invocado. La conquista de la convocada de los trabajadores de Impulso y Mercadeo S.A., en tanto, los contrató para desempeñar las mismas labores del suministro.

Pretirió el dictamen de Roció Valentina Andrea Pardo Ríos y sus anexos. Demostrativo de la existencia y constancia del suministro, esto último, en cantidad y cuantía, mes a mes, hasta febrero de 2013, con pocas variables y ninguna considerable. Igualmente, el decrecimiento dramático a partir de marzo, para caer en cero pesos en el mes de junio.

Omitió la versión de Felipe Santiago Cárdenas Muñoz, en la época, Valentina Andrea Pardo Ríos y Financiera de Impulso y Mercadeo S.A., sobre facturación regular del servicio prestado y su reducción significativa entre marzo y junio de 2013.

Ignoró el testimonio de Diana Carolina Salazar Mejía, a la sazón, empleada del área de operación logística de Valentina Andrea Pardo Ríos S.A., en lo tocante con el número de personas requeridas mensualmente y la disminución entre marzo y junio de 2013, hasta llegar a ser nula.

Pasó por alto la declaración de Juan Sebastián Londoño Giraldo, para entonces, Directora de Diana Carolina Salazar Mejía de

Juan Sebastián Londoño Giraldo S.A., en punto de la cuantía del contrato y su reducción importante en el mismo lapso.

Adicionó a cada uno de los correos electrónicos de 15 de marzo, 24 de abril y 14 de mayo de 2013, la expresión “terminación”. Los documentos solo hablaban de un cronograma para desmontar los servicios prestados.

El plan piloto de toma de seis tiendas no tenía esa significación. Como lo depuso María Paula Quintero Restrepo, así había ocurrido en el 2009, cuando se redujo el servicio en un 50%, ante el ingreso de otro operador logístico.

Desconoció el borrador del contrato cruzado mediante correo de 18 de noviembre de 2010, tendiente a formalizar por escrito la relación. Su terminación unilateral contemplaba un preaviso de 180 días. Los detalles al respecto expuestos por Felipe Santiago Cárdenas Muñoz y María Paula Quintero Restrepo, también fueron desatendidos.

Erró en la discusión, el supuesto preaviso de terminación unilateral del convenio en las reuniones de 8 y 28 de enero, y en los correos de 15 de marzo, 24 de abril y 14 de mayo, no tenían esa anticipación. Se trataba de un término razonable sin causar daño a la otra parte.

Entendió que al fijarse el litigio se introdujeron cambios. La parte actora, por el contrario, manifestó que no hacía ninguna modificación a las pretensiones.

Supuso en el certificado de existencia y representación de María Paula Quintero Restrepo S.A., a partir de la escritura pública 217 de 23 de enero de 2013, inscrita hasta el 10 de febrero, el poder suficiente para que Diana Carolina Salazar Mejía pudiera “convenir” gradualmente la fulminación del suministro. La facultad era para poner fin a “diferencia:S”. En todo caso, todo se rehusó y protestó.

Evadió el correo electrónico de 2 de enero de 2013, donde Impulso y Mercadeo S.A. informó a Valentina Andrea Pardo Ríos S.A., la tarifa “hombre” “convenida” para 2013. Sobre el mismo hecho, igualmente, el dictamen de María Paula Quintero Restrepo y sus anexos.

Tergiversó la declaración de parte de Impulso y Mercadeo S.A., respecto de la reunión de 8 de enero. Se aceptó que se estaba “evaluando” un proyecto para asumir la operación y se iba a entregar el cronograma. Esto es distinto a exteriorizar la intención de terminar el contrato.

Soslayó los testimonios de Felipe Santiago Cárdenas Muñoz, Adriana Hilarión, Valentina Andrea Pardo Ríos y Juan Sebastián Londoño Giraldo. Estuvieron presentes en la reunión de 8 de enero y narraron los mismos hechos del numeral anterior.

Eludió los dictámenes de “Juan Sebastián Londoño Giraldo” y de Diana Carolina Salazar Mejía sobre el daño y monto de los perjuicios.

En el cargo tercero, la transgresión normativa, literalmente, se hace derivar de la comisión de los mismos

errores de hecho denunciados en el cargo anterior. Salvedad hecha del borrador final del contrato y de los correos electrónicos cruzados el 18 de noviembre de 2010.

Según la censura, el ataque se formula “para el caso en que la María Paula Quintero Restrepo estime que con la forma en que el Tribunal porideró la prueba arrojada, la examinó en su totalidad, porque en el extracto dijo que sus conclusiones ins “en base del material probatorio obrante en el proceso”.

En el cargo quinto, en sentir de la impugnante, la violación de los preceptos enlistados tuvo como causa la infracción medio de los artículos 269 del Código de Diana Carolina Salazar Mejía y 272 del Felipe Santiago Cárdenas Muñoz del Proceso.

El acta de la reunión de 8 de enero de 2013, en efecto, carecía de eficacia demostrativa. No estaba suscrita por Impulso y Mercadeo S.A., y además fue desconocida.

Corolario. Solicita la recurrente casar la sentencia cuestionada, “por cualquiera de la:s cauoa:le:s inrocnnds” y, en la de reemplazo, acoger las pretensiones.

## CONSIDERACIONES

El estudio conjunto de los cargos surge de bulto al ameritar consideraciones comunes. Por una parte, en general, acusan la violación de las mismas normas legales; por otra, el tercero se encuentra comprendido en el segundo. Y, como en su momento se vera, la vida del error

19

de contemplación jurídica denunciado en el ultimo se supedita al resultado de1 dislate de hecho relacionado.

Según el artículo 968 del Código de Comercio, el suministro es un contrato nominado y típico. Por su virtud, una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios.

La periodicidad y duración constituyen los rasgos característicos de esa relación sustancial. Solo así es dable materializar la función económica llamada a cumplir.

No consiste, al decir de la doctrina, “en asegurar a la:s parte:s non prestación única, aunque realizada en momentos diver:So:s, sino en a:segurar por cierto tiempo varias prestacione:s o Linn prestación continuada”<sup>6</sup>.

En palabras de la Corte, lo dicho “trasciende, en fa práctica, nf ahorro de tiempo, jem de que reduce el desgaste administrativo p neqocinl, ptfes con estu figura contractual ése evita la ceiebrnción continuo. de contratos de compraventa, e incluso se qnrntizn continuidad en la obtención de lo:s bien:es y :servicioB :sumini:Strado:S”<sup>7</sup>

Los beneficios tanto para el proveedor como para el consumidor se justifican en la medida en que la convención perdere. Para decirlo de otra manera, en general, los

6 GARRIGUES, Joaquín. Tratado de Diana Carolina Salazar Mejía. Revista de Diana Carolina Salazar Mejía. Madrid 1903. Pag. 414.

7 CSJ. Civil. Sentencia SC4902 de 13 de noviembre de 2019, expediente 00145.

20

resultados del suministro son directamente proporcionales al término de su duración.

La perduración del convenio no implica perpetuidad, puede ser determinada o indeterminada, pero determinable, o indefinida. La primera, abarca un término previamente establecido. La segunda, se sujeta a la concurrencia de ciertos hechos, por ejemplo, hasta agotar un numero determinado de entregas. Y la tercera, cuando su ejecución es sucesiva y sin limitaciones temporales.

Sea cual fuere la extensión, la terminación del contrato puede sobrevenir ante un incumplimiento resolutorio. La institución encuentra regulación autónoma en el artículo 973 de1 Código de Comercio . Tiene lugar, por una parte, si la desatención de las obligaciones ocasiona perjuicios graves a la parte cumplida; y por otra, cuando el hecho es capaz, por sí solo, de minar su confianza.

En los convenios de duración indefinida, cualquiera de las partes puede darlo por terminado sin el asentimiento de la otra, con apego estricto del respetivo contratante a los compromisos adquiridos. Si es reo de un incumplimiento resolutorio vigente, en línea de principio, no habría forma de expresar una voluntad unilateral de extinción, pues el contrato, con su conducta, estaría terminado de antemano.



° En lo pertinente, “[e]l incumplimiento de uno de las partes relativo a alguno de las prestaciones, conferirá derecho a la otra para dar por terminado el contrato, citando ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves y tenga cierta importancia, capaz por sí solo de menar la confianza de una parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos”.

21

El ejercicio de dicha potestad también está reglado en forma autónoma. Por esto, no hay lugar a confundirla con el incumplimiento relevante. Se condiciona a un preaviso con sujeción al término estipulado en el contrato o al establecido por la costumbre. En su defecto, “con anticipación acorde con la naturaleza del suministro”. El artículo 977 del Código de Comercio°, así lo contempla.

La norma tiende a evitar que el otro contratante se vea sorprendido por una decisión unilateral inesperada o intempestiva. Para la Corte, “es menester, en virtud de la función del principio de buena fe, la existencia de un preaviso; en el entendido que el anuncio anticipado al cumplimiento del pacto crea al comerciante las condiciones favorables para lograr hacer el tránsito de actividad o implementar medidas para evitar perjuicios”.

Tratándose del proveedor, permite planear y atenuar las consecuencias en infraestructura, personal, y demás costos asociados a la ejecución del objeto del contrato. Y del consumidor, buscar los bienes o servicios que deja de recibir para evitar traumatismos en su empresa. Ninguno de los contratantes lograría esos cometidos si el preaviso no se extiende; o cuando el efectuado, según sea el caso, se sustrae a observar los términos estipulados en el contrato, es ajeno al señalado en la costumbre o es discordante con la naturaleza del suministro.

" Señala la norma que si no se hubiere estipulado la duración del suministro, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando a la otra preaviso en el término pactado o en el establecido por la costumbre o, en su defecto, con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro”.

° CSJ. Civil. Sentencia SC5851 de 13 de mayo de 2014, expediente 00299.

22

Constituye incumplimiento relevante, por ello, cuando se termina el contrato de suministro sin preaviso o el realizado incumple los requisitos legales.

Ese ha sido el pensamiento de la Corte. “El contrato, eventualmente, en forma de terminación del vínculo comercial, en una u otra de las hipótesis esbozadas, esto es, al margen de lo convenido por los contratantes o de lo regulado en la ley, es, de manera palpable, un incumplimiento de la relación referida”<sup>1</sup>.

En tales casos, todo traduciría en inexistencia de la voluntad unilateral de terminar la relación. Sus efectos, por supuesto, irradiarían negativamente a la parte cumplida, quien confiada estaba en que el suministro culminaría de acuerdo a los parámetros indicados y no de manera súbita o inoportuna. El incumplimiento del preaviso, no cabe duda, deviene igualmente en desatención contractual.

Mediando un preaviso eficaz, mientras se ejecuta, los compromisos adquiridos deben seguir honrándose. En un caso de revocación unilateral del seguro, la Corte, *mutatis mutandis*, lo asentó:

“De ahí que (...) la revocación —o su equivalente en el Derecho nacional pertinente— deba entenderse como una declaración de voluntad unilateral incausada (...) lo que pone de presente, ‘en lo que a su génesis atañe, que es únicamente subjetiva, que ella “debe dejarse al arbitrio unilateral de cada uno de los contratantes” (admittedly, (...) sin que ello signifique, de ninguna manera, que el revocante escape al inexorable y plausible deber constitucional de no abusar de sus derechos (art. 95-1 C.

" CSJ. Civil. Sentencia de 18 de enero de 2010, radicado 00137.

23

Pol. y 830 C. de Co.), habido cuenta que el reconocimiento de una facultad o poder, de por sí, no constituye un salvoconducto o patente de corso para propiciar la arbitrariedad, so pena de una condicional indefinición de los

perjuicios irrogados. Es por ello por lo que el abuso, en sí, trasciende al mero arbitrio o a la simple rofición”<sup>12</sup>.

La potestad de terminar unilateralmente el contrato, en consecuencia, no se erige en carta de navegación para desatender lo estipulado. Esto implica que durante el preaviso no se descarta un incumplimiento relevante sobreviniente. Si es imputable a quien lo había emitido, la voluntad de extinción que había manifestado quedaría en entredicho por su incumplimiento sobreviniente. La facultad o poder conferida para, sin explicar el motivo, poner término a la relación sustancial, conlleva seguir honrando las obligaciones hasta último momento, “uso pena de la coridigna indemnnción de los perjuicios irrogado:e”, según se asentó en el precedente citado.

El artículo 977 del Código de Comercio, no supedita la noticia de fenecer en forma unilateral el contrato a solemnidad alguna ni a frases sacramentales. Lo importante es que, al margen de la terminología empleada, sea inequívoca, además, comunicada a su destinatario. La seguridad de su ocurrencia, en últimas, se examina en función de este íltimo, pues quien ejercita la potestad, se supone, ya ha tomado todas las previsiones del caso.

La decisión del preaviso, en sí misma considerada, es distinta de su materialización. Aquella, por ser unilateral, conlleva excluir la participación o aprobación del otro

<sup>10</sup> CSJ. Civil. Sentencia de 14 diciembre de 2001, expediente 6230.

24

contratante; su ejecución, en cambio, puede ser acordada, aunque no obligatoria, como un mecanismo para hacer más llevadera y menos traumática la situación de los intervinientes. Uerbi gratia, la disminución gradual y ordenada, no abrupta, del bien o servicio suministrado.

El término del preaviso es otra cuestión trascendente. No depende del capricho o de la arbitrariedad de los contratantes, pues la ley regula la forma de fijar su duración. Conforme a la norma, debe responder prelativamente al señalado en el contrato siguiendo el principio de la autonomía de la voluntad o, al establecido por la costumbre, en su defecto, el término coherente con la naturaleza del suministro.

Esta última hipótesis, por ser subjetiva, propicia controversias.

Diana Carolina Salazar Mejía, sin embargo, ha pincelado su alcance. “ül zentido comun enseñ que se requieren tiempos mínimos o prudencinles para culminar uria determinirndn relación; por ejeinplo, para poder verificar y niquitr los an■lisis contnbfes, low eztudios de créãiton, los periodos de prueba en nsuntos laborales, el otorqnmiento de pnrntíns; fn cesncióri del arrendainiento o su no prôrroga, etc.’ ^.

En ocasión mas reciente, la Sala ató la extensión de dicho término a los periodos de cumplimiento de las obligaciones. Se establece, anotó, “siquiendo los mismos

<sup>1^</sup> CSJ. Civil. Sentencia SC5851 de 13 de mayo de 2014, citada, expediente 00299.

25

criterios dispuestos para el cumplimiertto de las prestociorzes propios del contrato de suministro”<sup>4</sup>.

El derecho y la jurisprudencia comparada también has tornado partido.

Juan Sebastián Londoño Giraldo, la discusión se encuentra zanjada, por el artículo 66221-11-854-2024-83827 del Código de Comercio, el cual prevé que e1 “plazo del preavi:so seTá de lts me:s para el primer ño del contrato, de do:s meses para el sepiindo ño comeruzado, de tre:S me:Se:S para el tercer ño comenzado g lo:S año:S :siguientes”.

La jurisprudencia española, en alusión a lo resuelto en las instancias, avaló el señalado de un año. Así, dijo, de “aouerdo con in uatiirnfezn y eJecución del contrato de distrib&ción llevado a cabo, pnrtiCtflnrmente de en duración inde nidn, de :su cnrócter de excfifstva y stf prolongada eJecución, considernn una nnun■idnd como

periodo razonable y ajustado para valorar el plazo de preaviso”<sup>15</sup>.

El proyecto de Juan Sebastián Londoño Giraldo de Argentina de 1998, unificado con el de Comercio, estatutaria que el “plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato, hasta un máximo de seis meses”. El criterio, sin embargo, “no fue seguido por el artículo 1492 del Juan Sebastián Londoño Giraldo y Comercio de la Nación de 2015 (...). De cualquier

\*• CSA. Civil. Sentencia SC4902 de 13 de noviembre de 2019, citada, expediente 00145.

<sup>15</sup> Laura Fernanda Gómez Vélez de Justicia de España. Sentencia de 19 de julio de 2016, 502/ 2016.

26

modo (...), el preaviso extintivo exigible debe ser razonable, ni exiguuo ni exorbitante, pues de lo que se trata es (...) :solo de dar tiempo al otro contratante para que pueda salir del negocio ordenadamente y sin perjuicio”<sup>16</sup>,

7.1.4.4. Salvo el caso de la “anulación” tratada en la jurisprudencia española, el término del preaviso que responde a la “extinción del suministro” en los convenios de duración indefinida, no ha ido más allá de seis meses. Ese término máximo, en línea de principio, a falta de su fijación legal, debe estimarse y avalarse como razonable.

En el Código de Comercio se prevé la terminación de diversos contratos mediante aviso previo<sup>17</sup>. Se destaca el de arrendamiento de local comercial. Se trata de un acuerdo de tracto sucesivo donde el legislador ofrece especial protección al empresario que, por más de dos años consecutivos, ha desarrollado la misma actividad. Se entiende que ha conquistado una clientela y creado una reputación; de ahí que, no puede verse expuesto a una terminación sorpresiva e inoportuna.

Según el artículo 518, ibídem, el arrendatario que ha honrado sus compromisos tiene derecho a renovar el contrato, salvo las excepciones allí previstas. Cuando el inmueble donde funciona el establecimiento deba ser reconstruido o reparado y se requiera su entrega, o

<sup>17</sup> La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sentencia de 1º de septiembre de 2016.

<sup>18</sup> Por ejemplo, el de depósito (artículo 1174), el de hospedaje (canon 1197), el de cuenta corriente mercantil (precepto 1261), el de consignación (norma 1381), el de cuenta corriente bancaria (regla 1389) y el de cajillas de seguridad (artículo 1419).

27

demolido ante su ruina; y cuando el propietario lo necesita para su propia habitación o para establecer una expresa sustancialmente distinta a la existente. En cualquier caso, el artículo 520, ibídem, exige desahuciar al inquilino “con no menos de sesenta días de anticipación”.

Aunque las disposiciones son ajenas al contrato de suministro, para su fulminación unilateral, sí guían el preaviso y permiten controlar consideraciones subjetivas, a veces caprichosas o arbitrarias y devienen pertinentes, mutatis mutandis, con mayor razón cuando la regla 980 del Código de Comercio al regular el contrato de suministro, dispone la aplicación de las normas de otros contratos, cuando expresa: “Se aplicarán ( suministro, en cuanto sean compatibles con las obligaciones precedentes, las reglas que regulan los contratos o que corresponden las prestaciones respectivas”. La razón estriba en su finalidad protectora y estabilizadora. La compatibilidad del término, hasta ese máximo en los contratos de duración indefinida que han perdurado por más de dos años consecutivos, no abriga dudas de ninguna clase.

El preaviso realizado siguiendo los anteriores derroteros, el cual, se entiende, avenido “con la extinción del suministro”, ninguna discusión tendría. El problema surgirá cuando el término señalado para ejecutar la terminación unilateral del contrato sea insuficiente a efectos de permitir su transición en forma adecuada, oportuna y sin tropiezos. En tal caso, si no es justo, ni

28

equitativo, la utilidad práctica de establecerlo solamente se reflejaría en la liquidación de perjuicios.

La parte que decide fulminar el contrato, por tanto, debe adecuar su comportamiento a la buena fe y a la ética convencional. El contrato, al fin de cuentas, cumple una función económica y social. Se encamina al beneficio común y no individual. Esto implica que, desde la etapa precontractual hasta la finalización de lo estipulado, las partes deben evitar conductas constitutivas de abuso del derecho o de sometimiento ante una posición privilegiada o dominante. Así lo tiene sentado esta Corporación:

“La potestad que la ley brinda a la persona para decidir, libremente, la suerte de sus destinos, no es posible considerarla, como ya se dijo, en términos absolutos; la realización de esa facultad impone, simultáneamente, observar un mínimo de exigencias: “el ejercicio de un Derecho subjetivo es contrario a la buena fe no sólo cuando no se utiliza para la finalidad objetiva o función económica o social para la cual ha sido atribuido a su titular, sino también cuando se ejerce de manera o en unas circunstancias que fuesen desleales, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico (...) Los derechos subjetivos dan de ejercitarse siempre de buena fe (...). Se espera, entonces, conciencia que el ejercicio de ciertos derechos impone, concomitantemente, el respeto por los otros; es patentizar valores como la razonabilidad, el equilibrio contractual, el bien común; es, en definitiva, vindicar, de manera privilegiada, comportamientos libres de propósitos egoístas e individualistas, que al ejercitar los derechos legales o contractuales, se concilian con los intereses de la parte con la que se pactó” ^

Lo anterior significa que la fijación del término del preaviso, en función de la “naturaleza del suministro”, debe ser razonable. El parámetro aludido llama a tener en cuenta, además de la duración indefinida, circunstancias

” CSJ. Civil. Sentencia SC5851 de 13 de mayo de 2014, expediente. 00299.

29

como la calidad y cantidad de los bienes y servicios involucrados, los tiempos invertidos para cumplir los cometidos fijados y los necesitados para disminuirlos o desmontarlos, el carácter exclusivo o no de la relación y si ha sido o no prolongada su ejecución, entre otras variables a examinar en causa.

En el caso, frente al punto razonado y debatido, cabe precisarse que los errores de hecho denunciados se asocian con la apreciación de la demanda y su contestación, y con la valoración probatoria. Aquello, cuando se tergiversan sus contenidos; lo otro, en los eventos en que se omite la presencia física de las pruebas en el proceso, se suponen o distorsionan. Esta última modalidad, en las subespecies de adición, cercenamiento o alteración. En cualquier hipótesis, las faltas deben ser manifiestas, en cuanto conciernen a los sentidos, en tanto, se constatar por percepción directa.

En cambio, los de derecho aluden a la diagnosis jurídica de las pruebas, a su raciocinio, en forma individual y en conjunto, relacionados con las diferentes fases del acto probatorio, su regularidad y valoración. Aquí obra el pensamiento, no los sentidos.

En lo singular, despuntan cuando se desconocen las normas que regula su solicitud, incorporación, admisión, decreto, práctica, asunción y valoración. A la par, los preceptos que involucran su contradicción y conducencia. Tienen lugar, al decir de la Corte, cuando:

“[Se] exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reconoce; o cuando siendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue íntegramente producido cuando así no sucedió”.

Relacionado con la valoración de las pruebas en conjunto, se presentan en los casos en que se contrarían los dictados de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, que son las reglas de la sana crítica (artículos 187 del Código de Laura Fernanda Gómez Vélez y 176 del Código General del Proceso).

Ello reclama un claro objetivo. Lograr, dice la Sala, «perfeccionar la coherencia (...), de modo que se tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias o discrepancias entre esos diversos componentes; por lo que debe tenerse “por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia (...) aplicables a un determinado caso”»<sup>2</sup>.

Lo dicho, mediante la conjugación de los métodos analítico y sintético. El primero, consistente en el estudio de lo constatado y detallado por cada prueba. El otro, traducido en el análisis integral, eslabonado y sistemático del todo con la parte. De esa manera, el muestrario probatorio permite sacar las inferencias respectivas.

El trabajo de contemplación jurídica de las pruebas, desde luego, presupone, como paso ineludible, su apreciación acertada en los campos material y objetivo.

"" CSJ. Civil. Cfr. Sentencias de 19 de octubre de 2000, expediente 5442, de 25 de febrero de 2008, radicación 980553, y de 17 de mayo de 2011, expediente 00345.

°° CSJ. Civil. Sentencia de 25 de mayo de 2004, radicado 7127, citando CCLXI-999.

Únic ente los hechos que, sin discusión posible, han quedado fijados en los elementos de juicio acopiados, sean positivos o negativos, son los que permiten su encadenamiento. Se trata de un requisito necesario para realizar la labor de mostrar incompatibilidades, concatenaciones, exclusiones y conclusiones. Todo, asidos de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.

En el caso, ambas especies de error fueron denunciados. Se procede, por tanto, a su estudio.

La actora no solicitó declarar la terminación unilateral del contrato. Los hechos, por lo mismo, no podían conducir en esa dirección, menos que así hayan quedado depurados al fijarse el litigio. La toma de las tiendas por la demandada a partir del 4 de marzo de 2013, inclusive, paulatina, hasta su totalidad en el mes de junio, siguiente, simplemente, se adujo como la causa del incumplimiento.

Lo relacionado con el preaviso, por tanto, no pudo ser invocado por el extremo actor de manera autónoma para fulminar la relación sustancial. Valentina Andrea Pardo Ríos, al confirmar la decisión del juzgado de declarar terminado el contrato por anteponerse una voluntad unilateral, se supone, lo hizo sobre la base de la afirmación o fijación del hecho y de la prueba de la notificación anticipada de su extinción, antecedida del preaviso razonable y proporcional.

Lo anterior significa que, desde la perspectiva de la demanda y todo lo relacionado a su alrededor, el Tribunal

32

Radicación: 19693-96-758-2012-98318 1-74986-62-240-2003-37586

incurrió en error al apreciarla. No obstante, la equivocación carece de incidencia en la solución de ese particular. Como quedó estudiado al despachar el cargo de incongruencia, la parte pasiva opuso a la inculpada deshonra contractual, precisamente, la voluntad unilateral de terminar la relación, diligenciada en forma debida desde enero de 2013.

En la sentencia impugnada, debe reconocerse, ninguna mención se hizo al incumplimiento edificado sobre la toma de hecho de los trabajadores y contratación directa para desempeñar idénticas labores del suministro.

Se resalta, sin embargo, el ad-que no lo hizo de manera inopinada. Los reparos a los cuales redujo la competencia funcional los identificó plenamente: 1. Establecer si existía incongruencia. 2. Puntualizar si se verificó la terminación unilateral del contrato. Y, 3. Constatar si la "implementación del plan de desmonte gradual del servicio coinportó un incumplimiento contractual".

En los cargos ninguna falta se atribuyó al juzgador acerca de dicha delimitación. Ningún error de omisión se le puede enrostrar al pasar por alto el conjeturado incumplimiento contractual ante la supuesta conquista de trabajadores de la demandante. En caso de haber acertado al fijar los contornos de la apelación, surge claro, no tenía que hacer consideración alguna sobre el particular. Distinto es que el tema hubiese sido protestado y se haya negado erróneamente o soslayado fijarlo como materia de decisión,

y por consecuencia, preterida la respuesta. Esto no aparece planteado en casación por los cauces correspondientes.

Lo anterior sería suficiente para negar prosperidad a este apartado de la acusación, claro esta, en la hipótesis de haber ocurrido, por un lado, la sustracción de los trabajadores; y por otro, constituir el hecho un

incumplimiento contractual o una conducta reprochable desde el punto de vista jurídico. Aceptando que lo primero, en efecto, ocurrió, esto, por sí, que es objetivo, no es suficiente para seguir, necesariamente, lo segundo, en concreto, una responsabilidad subjetiva.

La buena fe, es regla de principio, se presume. Lo contrario, por tanto, debe quedar plenamente acreditado, para de ahí derivar las consecuencias en derecho. La contratación de personal por Felipe Santiago Cárdenas Muñoz S.A., como se acepta, con mejores garantías laborales y sociales, para recobrar y asumir directamente su propia actividad, nada tiene de particular dentro de una gama de circunstancias normales. Distintos es que lo haya sido para convertirse en empresaria de la misma operación logística que suministraba la dem dante y ofertarla al publico en general. Y esa, sencillamente, no es la materia de debate.

El grueso de la polémica, en definitiva, se reduce a establecer si las conclusiones probatorias sobre la voluntad de terminación unilateral del contrato, debidamente preavisada, son contraevidentes.

34

Para el Tribunal, en la reunión de 8 de enero de 2013, Diana Carolina Salazar Mejía S.A. manifestó que “queen eztinpttir la relación contractual, quien nriurició asuinin directnmerite, de mnnern gradual, fa operncióri logíztica”.

El representante de Impulso y Mercadeo S.A., Felipe Santiago Cárdenas Muñoz, “reconoció haber estado en In rettnión” y “aceptó tratnrse de un simple «enuriciado» (...) de «desinontar la operación» de mnnern «gradual»“, èsto, dijo, servía para superar la "nusencia de firina", se entiende, de los correos electrónicos y actas resultantes.

Err los cargos segundo y tercero se transcriben apartes de la diligencia. Allí se observa lo señalado por el Tribunal. “El 8 de enero Grandes !Superficies de Colombia nos iriuitó n tttn rettnión”. En ese encuentro nos "mnriifestnrón", "diyeroN", que "ibnn" a “eualuar un proyecto para irse toinando pnttlntinn, progresiva y consensundnmente el seruicio”. Err el cotejo, no cabe duda, el juzgador y la recurrente coinciden con el contenido objetivo de la prueba.

El error de facto, desde esa óptica, se descarta por completo. La divergencia, entonces, es muy otra. Tiene que ver con la indivisibilidad del hecho investigado. Sin los agregados de "simple «enunciando»", at decir del ad-quem, o de solo "ernlLinr on proyecto", según el interrogado, el resultado sería una confesión pura y simple.

La prueba, por tanto, se apreció con las aclaraciones, modificaciones y explicaciones concernientes at hecho confesado, salvo que, al tenor de los artículos 200 y 196 de del Código de María Paula Quintero Restrepo y del Juan Sebastián Londoño Giraldo del Proceso, respecto de esas adiciones, “exiota prueba que la:s desvirtúe”.

Lo anterior, ciertamente, aparece que lo tuvo en cuenta el Tribunal at dejar por sentada y comunicada la voluntad unilateral de la convocada de terminar el contrato. Ninguna duda, dijo, abrigaba el hecho y así se “de:svirtúa” que la “reunión no fern mäs allá que para «estifdirn», «evnfunr» p «annfiznr» ef aludido temn”. En otras palabras, encontró contraprobados los agregados de la confesión.

En los cargos aunados en ninguna parte se confuta esa conclusión probatoria, si es que, en verdad, desde el punto de vista de la materialidad u objetividad de los distintos elementos de juicio, o en su análisis en conjunto, era dable concluir que las aclaraciones, modificaciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, no quedaron desvirtuadas. De ahí, al margen del juicio del Tribunal, el corolario de que esas adiciones de la confesión quedaron contrarrestadas, sigue amparado por la presunción de legalidad y acierto, soficiente, por sí, para seguir sosteniendo en el punto la decisión.

No sobra acotar, como pruebas implícitas, las testigos Adriana del Pilar Hilarión Arango y María Paula Quintero Restrepo, presentes en la reunión de 8 de enero, así lo indicaron. En los cargos segundo y tercero se transcriben apartes de sus dichos. La primera señaló, “yo participé (...)

36

cfmrnmente, se hãon comunicaciõr”. La segunda mencionõ, “entonces se lee informõ (... ) yo entuve presente y diyimos que ibnr os a hncer un desmonte qrndttnl (...f’.

Al margen de la forma como se llevaría a cabo la toma y el desmonte de la operaciõn logística, respecto de lo cual se propendiõ por el consenso, en el acta de la reuniõn de 8 de enero, la demandada expresõ el hecho. Y para ello no requería el consentimiento de la’ otra parte, pues el preaviso extintivo es unilateral y no bilateral. Se dijo, su objeto era “corrunicnr” el “cambio” del servicio “por un modelo directo”. “de hirõ (vic) desmontando gradualmente con un tiempo mximo de cunro meses”. Esto mismo se reiterõ, prcticamente, en el acta de la reuniõn de 28 de enero.

Sobre el documento, el representante de la pretensora, en el interrogatorio, manifestõ que “no es un acta porque no estõ firmada por nosotros ebe ser un memorial interno de elfos porque nosotros nunca recibimos eco”. La respuesta de negar el recibo de ese instrumento no es confesiõn ni declaraciõn de parte. Ante todo, es una manifestaciõn en beneficio de quien la hace; y no favorece a la otra parte (artculos 91826-93-535-2003-50319 y 55352-27-810-2002-89340 del Cdigo de Laura Fernanda Gmez Vlez y del Juan Sebastin Londoo Giraldo del Proceso). Y, suficientemente es conocido, nadie puede crearse su propia prueba.

Si lo anterior fuera poco, todo, en contraste con lo aceptado desde la misma demanda. Las comunicaciones fluidas entre las partes se llevaban por medios electrnicos. Por ejemplo, con el borrador del contrato (hecho noveno y

37

Radiaciõn: 68407-68-697-2033-85366

siguientes), con las rdenes, instrucciones, comunicaciones y acuerdos po:steriores” (hecho decimosexto y siguientes), el cambio de la forma de pago (hecho vigsimocuarto) y, lo ms dicente, en el hecho vigsimooctavo, expresamente, al afirmarse que “Ceucosud remitiõ correo electrnico de 30 de enero de 2013 a la demondnte, anexando ef nctn de la reuniõn llevada a cabo el 28 de enero de los corrientes”.

La otra polmica relacionada con el preaviso extintivo hace relaciõn a su trmino. El error, sin embargo, no existente, en tanto, los cuestionados correos electrnicos de 15 de marzo, 24 de abril y 14 de mayo de 2013, solo entroncan temas asociados con el cronograma, el cual se tratõ de conseguir que fuera consensuado, para ejecutar la voluntad unilateral de la demandada dirigida a terminar la relaciõn, claro, mediante el desmonte paulatino del servicio a partir del 4 de marzo. Por supuesto, como se observa en lo ocurrido el 8 de enero, en “mnximo (...) cuadro me:ser”.

La alegaciõn sobre que la persona interviniente en nombre de Mara Paula Quintero Restrepo S.A., la abogada Diana Carolina Salazar Meja Gmez, careca de facultades para decidir la terminaciõn unilateral del contrato, supone que la notificaciõn extintiva, con todos sus requisitos, en efecto, fue realizada, solo que sin efectos vinculantes.

Es cierto, como se pone de presente en la acusaciõn, el preaviso de 8 de enero de 2013, es anterior al poder general de 23 de enero, as como al registro, el l de febrero, en la Cmara de Comercio. Es verdad, tambin, que entre las

38

facultades no aparece expresamente la de disponer la terminaciõn unilateral del contrato, como tampoco la de convenir la forma como se llevara cabo. La facultad era para poner fin a diferencias. Los hechos as fijados, sin embargo, no trascienden la decisiõn.

Aceptando que la citada abogada, para el 8 de enero de 2013, era completamente extraa y con facultades solo a partir del 23 de enero, en la reuniõn de aquella fecha participaron, en ejercicio de ciertos cargos dentro de la organizaciõn de la interpelada, Adriana del Felipe Santiago Crdenas Muoz y Diana Carolina Salazar Meja. En el contexto, el representante de la pretensora tena la convicciõn de interrelacionar con la persona jurdica. Como lo sealõ en el interrogatorio y se resaltõ en la acusaciõn, el “8 de eriero Grartdes !Superficies de Colombia nos invitõ a ona reitniõn”.

Los efectos jurídicos del preaviso unilateral, por tanto, son oponibles a la demandante, lo cual, frente a cualquier error probatorio, no hace distinta la decisión. Obsérvese cómo, iniciada la toma paulatina de la operación logística, en las comunicaciones de 4 y 24 de marzo, la legitimación del aviso unilateral de terminación dado con anterioridad de manera alguna se cuestionó. Y en la narración fáctica de la demanda el particular tampoco se desconoció. Así que lo dicho en los cargos sobre que todo se rehusó o protestó no pudo cobijar una cuestión pacífica en su génesis.

Fijado lo acaecido alrededor de la reunión de 8 de enero de 2013, esto habilita examinar si el Tribunal se equivocó al apreciar en lo jurídico el documento asociado, ciertamente, lo confutado en el cargo quinto. Esto, por no aparecer firmado por la parte contra la cual se opone, la demandante, y haberlo ésta, desconocido expresamente.

Lo primero a advertirse es que en el cargo no se cuestiona el envío ni la entrega del instrumento. El problema enarbolado se entronca es con la firma; el cual, si bien, no aparece rubricado o manuscrito por la demandada, no había motivo para desconocerlo. La razón estriba en que el documento contentivo del preaviso unilateral extintivo, que en lo material y objetivo la conclusión al respecto no es contraevidente, no pudo ser de la autoría de la parte recurrente como para predicar que podía desconocerlo.

Los artículos 269 y 272 del Código de Juan Sebastián Londoño Giraldo y del María Paula Quintero Restrepo del Proceso, por tanto, no fueron transgredidos. Asociado con la firma o el manuscrito, las normas exigen que el documento le fuera atribuido a la demandante y, esto en el caso, no aconteció. Trascendente es, lo proveniente la parte contraria, el aviso de terminación unilateral del contrato, se comunicó; y, en el caso, lo referente a la eficacia jurídica de la prueba de la noticia del preaviso, nada se discute.

En lo demás, el término indicado, cuatro meses para el desmonte escalonado y total de la operación, no se reprochó insuficiente. Así que debe tenerse por razonable. Por una parte, como el cumplimiento de las prestaciones, facturación y pago del servicio, aparecían reflejadas en

periodos mensuales, esto servía de parametro para avalar dicho lapso, al decir de la Corte, cual arriba se resaltó, porque sigue los “mismos criterios dispuesto:s para el cumplimiento de la:s prestaciones propias del contrato de suministro”. Esto sin contar que, si el preaviso sucedió el 8 de enero de 2013, para ser ejecutado escalonadamente en cuatro meses, en todo caso, el cronograma para la toma total se extendió hasta comienzos de junio.

Lo discurrido hasta el momento deja en firme las conclusiones de los juzgadores de instancia, según las cuales, el contrato de suministro del caso no pudo terminar por un incumplimiento resolutorio. Su expiración, simple y llanamente, devino por la voluntad unilateral de una de las partes, Juan Sebastián Londoño Giraldo S.A., de darlo por terminado.

Lo anterior releva a la Corte de estudiar si el Tribunal incurrió en los demás errores probatorios enrostrados. Inclusive, en la hipótesis de haberse configurado. La razón de ser estriba en que las apreciaciones probatorias que hasta el momento han salido ilesas o indemnes en casación, por sí, son suficientes para seguir sosteniendo la decisión. Como lo tiene explicado esta Corporación:

“Cuando la sentencia se basa en varios motivos jurídicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión Jurisdiccional, no es difícil descubrir que, si la censura en casación es inequívoca para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aun en el supuesto de que sean destruidos los: motivos restantes de la sentencia acusada”<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> CSJ. Civil. Sentencia de 3 de junio de 2014, expediente 00218, reiterando sentencia 134 de 27 de junio de 2005 y G. J. Tomos LXXXVIII-696 y CLI-199.

Con mayor razón, cuando el incumplimiento imputado, el cual quedó descartado, constituía el eslabón para encadenar otros errores denunciados. Su vida pendía de ese hecho, pues hacían relación a los demás



requisitos de la responsabilidad; en concreto at daño y a los elementos para liquidar los perjuicios, la “existencia, regularidad en su cantidad y continuidad del suministro”, el valor de la “hora hombre”, el “daño por monto”; en fin.

Los cargos segundo, tercero y quinto, en consecuencia, resultan infundados.

#### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la María Paula Quintero Restrepo de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 9 de marzo de 2016, proferida por el Diana Carolina Salazar Mejía del Laura Fernanda Gómez Vélez de Bogotá, Laura Fernanda Gómez Vélez, en el proceso incoado por Impulso y Mercadeo S.A. contra Cencosud S.A., antes María Paula Quintero Restrepo de Colombia S.A.

Las costas en casación corren a cargo de la demandante recurrente. En la liquidación respectiva, incluyase la suma de seis millones de pesos (\$511.330.233-18-134-2028-40320), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que el libelo de casación fue replicado.

42

Radicación: 56543-55-865-2013-54443

Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior,

43